

FOLIO: 112 .-
Ciento doce .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de San Miguel
CAUSA ROL : C-413-2019
CARATULADO : FFSF SA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN/VERGARA

San Miguel, nueve de Febrero de dos mil veintiuno.

V I S T O S

Que con fecha 16/01/2019 (folio 1), comparece don Gian Carlo Lorenzini Rojas, abogado, en representación de **Latam Factors S.A.**, del giro de su denominación, representada legalmente por don Carlos Alberto Baudrand Saavedra y don Francisco Javier Hormazábal Riquelme; y de **Fondo de Inversión Privado Factoring Uno**, RUT 76.284.105-3, representada legalmente por FFSF S.A Administradora de Fondos de Inversiones, RUT 76.283.574-9, del giro de su denominación, todos domiciliados en Alonso de Córdova N° 2860, Of. 402, comuna de Vitacura, Santiago, quien en virtud de la Ley 20.169, deduce acción de cesación de actos de competencia desleal; en contra de doña **Tania Belén Vergara Díaz**, ejecutiva comercial, domiciliada en Pasaje 26 N° 0891, comuna de El Bosque; y solicita que se ordene la cesación de los actos de competencia desleal en contra de su parte, y la publicación de la sentencia definitiva en el Diario Oficial o en un diario de libre circulación nacional, a costa de la demandada; se condene a la demandada a indemnizar todos los perjuicios ocasionados, por la suma de \$20.000.000.-; y se curse la multa establecida en el art. 10 de la Ley N° 20.169, esto es, el máximo permitido y que corresponde a 1.000 UTM a beneficio fiscal; con costas.

Señala, que **Latam Factors** cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector financiero, iniciando su trayectoria en el año 2005 bajo el nombre de First Factors S.A., y en octubre de 2014, incorporándose como socio a FIMBank, banco especializado en el área de financiamiento del comercio, especialmente en mercados



emergentes, y que ofrece sus servicios en más de 50 ciudades del mundo, como Londres, Nueva York, Sao Paulo, Moscú, Estambul, Dubai y Malta, donde se encuentra su casa matriz. Añade, que **Latam Factors** cuenta con el respaldo de FIMBank y con profesionales que poseen más de 15 años de experiencia en la industria de las finanzas y el factoring en Chile.

Indica, que **Fondo de Inversión Privado Factoring Uno** es un fondo de inversión creado para adquirir títulos de crédito (facturas, cheques, pagarés, cuotas de contratos, etc.), creado y administrado por FFSF S.A. Administradora de Fondos de Inversión, sociedad cuyo principal accionista (99%) es **Latam Factors**.

Expone, que **Latam Factors** presta servicios tanto a **Fondo de Inversión Privado Factoring Uno** como a su sociedad administradora, en la compra de títulos de crédito y en la administración de dichas cuentas por cobrar.

Afirma, que para desarrollar los objetivos y funciones señaladas, sus representadas cuentan con un gran equipo de colaboradores, contexto en el cual, la demandada, doña **Tania Belén Vergara Díaz**, fue trabajadora de **Latam Factors** desde el 21/08/2017 hasta el 31/05/2018, fecha en la que cesaron sus funciones como Asistente Comercial.

Esgrime, que la demandada se apropió de información confidencial de su representada, y en especial de su base de clientes, a quienes comenzó a contactar para ofrecerle servicios similares.

Acusa, que con fecha 22/08/2018, su representada tomó conocimiento, a través de correos electrónicos de sus clientes, que la demandada, actual dependiente de la empresa Tanner, los estaba contactando y ofreciéndoles los mismos servicios que ofrecía cuando era dependiente de **Latam Factors**, haciendo uso en forma ilícita de su base de clientes, intentando apropiarse de algunos de ellos, incluso, efectuado visitas en Compañía de ejecutivos de su actual empleador.

Refiere, que el art. 1º de la Ley N° 20169, *“Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal”* (sic).



Esgrime, que lo anterior describe la situación de autos, donde la demandada hace uso de información y base de datos que no le pertenecen y que corresponden a años de trabajo y esfuerzo de las sociedades que representa.

Expone, que el art. 3º de la Ley Nº 20169, consagra que *“En general, es un acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”*. Añade, que ello se establece claramente con el actuar malicioso de la demandada quien, siendo ahora trabajadora de una empresa competidora de su representada, se apodera de forma irregular de toda la información exclusiva de clientes de **Latam Factors**, a la que tuvo acceso mientras era dependiente de ésta y sólo en atención a dicha circunstancia; antecedentes propios y hasta personales de cada uno de sus clientes, ofreciendo el mismo servicio ofrece **Latam Factors**, menoscabando a sus representadas y generándoles un daño reputacional frente a sus clientes.

Ilustra, que los listados de clientes reciben el tratamiento de secretos comerciales, se definen en general en términos amplios, e incluyen métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación, entre otros. Agrega, que si bien la decisión final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, y que entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza.

Expone, que todas las empresas tienen secretos empresariales, algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten, e implementan estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos contra toda revelación que les pueda ser perjudicial, mientras que muchas empresas, sólo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes o cuando intentan contratar trabajadores que tienen valiosos conocimientos del *know-how* del competidor o con acceso a sus bases de datos.

Manifiesta, que la utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular del secreto empresarial se considera práctica desleal y una violación de éste. Añade, que las bases de datos de clientes de sus representadas,



que está utilizando la demandada constituyen de manera evidente un secreto empresarial, toda vez que:

- 1) Es información que los clientes han autorizado revelar a sus representadas, sólo para los efectos de publicación en registros de morosos, lo que se hace de manera limitada y sólo en los casos en los que la política crediticia de la compañía lo permite. Agrega, que toda información, o inteligencia financiera o comercial que se pueda obtener de dichas bases de datos son un instrumento estratégico para el desarrollo del giro de sus representadas, cuya revelación a terceros implicaría una pérdida de valor significativa para ellas, por lo que deben considerarse a todas luces como secretos comerciales;
- 2) Atendido lo anterior, dicha información tiene un valor comercial y económico intrínseco;
- 3) Se trata de información debidamente resguardada respecto de terceros ajenos a sus representadas, por lo que no tiene carácter de datos o información pública.

Razona, que la apropiación indebida de la información por parte de un competidor o de terceros constituye una violación de los secretos comerciales de la empresa, y en consecuencia un acto de competencia desleal de los que específicamente sanciona la Ley N° 20169.

Termina, solicitando que se ordene la cesación de los actos de competencia desleal en contra de su parte, y la publicación de la sentencia definitiva en el Diario Oficial o en un diario de libre v circulación nacional, a costa de la demandada; se condene a la demandada a indemnizar todos los perjuicios ocasionados, por la suma de \$20.000.000.-; y se curse la multa establecida en el art. 10 de la Ley N° 20.169, esto es, el máximo permitido y que corresponde a 1.000 UTM a beneficio fiscal; con costas.

Al folio 13, rola Certificación receptorial del hecho de haberse notificado la demanda a la parte demandada, de conformidad al art. 44 del Código de Procedimiento Civil, previas búsquedas positivas efectuadas por ministro de fe en su domicilio de Pasaje 26 N° 0891, comuna de El Bosque.



Al folio 15, comparece la parte demandada evacuando el trámite de contestación, y solicitando el total rechazo de la demanda, con costas.

Señala, que fue trabajadora de LATAM FACTORS desde el 21/08/2017 hasta el día 31/05/2018, y lo hacía en calidad de asistente comercial.

Esgrime, que es falsa la acusación de apropiación de información confidencial de la empresa LATAM FACTORS, o cualquier otra empresa relacionada, y rechaza haberse apropiado de bases de clientes de las empresas demandantes. Agrega, que ha enviado correos electrónicos a diversos clientes, obtenidos de bases de datos otorgados por la empresa TANNER, en la cual efectivamente trabajo el día de hoy, pero niega rotundamente haber utilizado bases de datos obtenidas de mala forma en perjuicio de los demandantes.

Explica, que en Chile prima el principio de libre competencia, y a partir de este principio, lo que ha realizado como trabajadora de TANNER es ofrecer los servicios de esta empresa a diversos clientes, pero si se ha generado coincidencias de ofrecimientos de servicios a clientes de LATAM FACTOR, ésta se debe a que no existe ninguna prohibición de ofrecer servicios entre empresa, siempre que se haga en virtud del principio de buena fe y una competencia libre y transparente.

Señala, que la demanda se vuelve abusiva, toda vez, lo que se pretende es frenar la fuerza de venta de su persona y de la venta de servicio de la competencia que es TANNER, lo que constituye una verdadera competencia desleal.

Arguye, que el derecho esgrimido por la demandante no concuerda con ninguna de las tipificaciones de competencia desleal de la Ley 20169, y si bien, ésta hace alusión al quebrantamiento del secreto empresarial, se equivoca en el planteamiento de fondo, toda vez, que este secreto está dado por lo normado en la Ley 19039, que refiere a la propiedad intelectual. Agrega, que esta última se rige por la institución de INAPI, y no se ha presentado argumentación alguna de la propiedad intelectual de base de datos alguna, y tampoco alguna argumentación objetiva de las acusaciones de apropiación indebida que imputan en el libelo los demandantes.

A los folios 17 y 18, rola Acta de Audiencia de Contestación y Conciliación, instancia que se celebró con la asistencia de los apoderados de las partes demandante y demandada, quien para efectos de hacer valer su defensa presentó el



escrito de folio 15. En lo principal, interpuso una excepción dilatoria y una excepción de falta de legitimación activa; en el primer otrosí, contestó la demanda y en el segundo otrosí, interpuso demanda reconvencional.

El Tribunal confirió traslado respecto de lo principal y la solicitud de demanda reconvencional, peticiones que con posterioridad a la evacuación del traslado por la demandante, fueron resueltas rechazándose la excepción dilatoria, dejándose para definitiva la excepción de legitimación activa y no dándose lugar a la demanda reconvencional interpuesta por improcedente.

En cuanto a la contestación de la demanda contenida en el primer otrosí, el Tribunal tuvo por contestada la demanda.

Posteriormente, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, atendido a que las partes se encontraron en posiciones diametralmente opuestas.

Al folio 21, se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, recibándose la causa a prueba y rindiéndose la que consta en autos.

A folio 111 y encontrándose la causa en estado, el Tribunal citó a las partes para oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O

En cuanto a la objeción de documentos del folio 51.

Primero: Que al folio 51 comparece el apoderado de la parte demandante objetando los documentos ofrecidos por la demandada al folio 40. Señala que se tratan de simples fotocopias de documentos cuya autenticidad e integridad no le consta, y además, todos ellos emanan de terceros ajenos al juicio quienes no han comparecido en autos reconociéndolos.

Segundo: Que al folio 67, comparece el apoderado de la parte demandada evacuando el traslado del incidente, solicitando el total rechazo del mismo.

Respecto de la objeción por falta de integridad y autenticidad por tratarse los documentos impugnados de simples fotocopias, señala que con la promulgación y publicación de la Ley 20.886 sobre Tramitación Electrónica, los documentos se



deben digitalizar para ser acompañados en la carpeta electrónica, y así lo han expresado el legislador y la excelentísima Corte Suprema de Justicia en los autos acordados pertinentes. Añade, que conforme a los arts. 5 y 6 de la referida Ley, si existe un cuestionamiento de falta de autenticidad, el tribunal a petición de parte o de oficio, decretará un plazo de tres días para acompañar materialmente los documentos al tribunal, los cuales quedaran bajo custodia.

Esgrime, que se ha interpretado igualmente por los Tribunales Superiores de Justicia, debe primar la buena fe procesal, consignado en el art. 2º de la Ley 20.886, motivo por el que la objeción según la fundamentación de falta de integridad o autenticidad debe ser rechazada pues *“los documentos acompañados son los mismos y originales que su custodia se pide en esta oportunidad”* (sic).

Expone, respecto del argumento consistente en que los documentos objetados emanan de terceros, el solo hecho de que la interpretación de pertinencia de pruebas, corresponde exclusivamente al Tribunal que conoce de ella. Añade, que la alegación del incidentista se cae en su propio fundamento, pues ha sido la propia demandante quien ha solicitado primeramente la declaración de testigos, que son los mismos que se acompañan en correo electrónico y declaración jurada, y conforme a lo cual se podrá contrastar la declaración y correo presencialmente a la hora de deponer la prueba testimonial, lo que convierte a estos documentos de vital importancia para el juicio.

Tercero: Que conforme al mérito de autos, se tiene que los documentos objetados fueron acompañados por la parte demandada al folio 40, y consisten en los siguientes:

- 1) Declaración Jurada de don Cristian Jesús Basoalto Rebolledo, firmada ante Notario Público Orlando Cerda Silva de fecha 22/11/2019.
- 2) Certificado emitido por Tanner Servicios Financieros y suscrito don Ricardo Elías Cerda Silva, Agente de sucursal Plaza Egaña, con fecha 22 de noviembre de 2019.

Cuarto: Que del estudio de los documentos impugnados, se tiene que conforme a su naturaleza, estos constituyen instrumentos privados que emanan de un tercero ajeno al juicio, cuyas causales legales de objeción son *la falsedad y la*



falta de integridad, entendiéndose la primera, como aquella consistente en la falsificación misma del documento, sea creando completamente un documento privado que no existe, o en la falsedad material del mismo, es decir, cuando existiendo verdaderamente un documento, se altera su contenido haciéndole adiciones o enmiendas. En lo concerniente a la falta de integridad, ésta se refiere a la carencia o privación de su calidad de íntegro, a que no le falte ninguna de sus partes.

Quinto: Que los fundamentos en que se sustenta la objeción alegada por la demandante no se refieren a las causales por las que se debe objetar este tipo de documentos de acuerdo a lo señalado en el motivo precedente, sino más bien al valor probatorio de los mismos para acreditar los hechos controvertidos, facultad privativa del tribunal, razón por la cual la impugnación de documentos deducida por la demandada será rechazada, sin perjuicio del valor probatorio que se les asigne en definitiva.

A mayor abundamiento, observados los documentos impugnados, se tiene que éstos son íntegros, toda vez, que no se advierte que le falte alguna de sus partes.

En cuanto a la objeción de documentos del folio 55.

Sexto: Que al folio 55 comparece el apoderado de la parte demandada objetando en virtud del. Art. 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, y por falsedad y falta de integridad, los documentos ofrecidos por la demandante al folio 35, y singularizados en los números 2, 3, 5 y 6 de dicha presentación, con costas.

Señala que el reglamento interno acompañado en el N° 6 de la presentación señalada, viene sin firma de su representada, acompañándose un comprobante en el N° 2 que supuestamente acreditaría que este reglamento le fue entregado a su parte. Agrega, que el demandante llama a la confusión, ya que no su parte no tiene claridad de que el referido documento se trate del mismo que fuera firmado y acompañando por las actoras.

Esgrime, que se ha acompañado un Código de Ética en el documento signado con el N° 5, el cual viene enmarcado por la parte demandante en lo que evidentemente sería el secreto comercial, lo cual está vedado respecto a lo que es integridad de la misma, pues primeramente se quiere inducir al tribunal a creer que



esa cláusula es de tal importancia que la enmarcan para el conocimiento de sus empleados, lo cual objeta por ser falso y falto de integridad por la evidente modificación que se le ha realizado. Añade, que adicionalmente objeta el documento por falta de autenticidad por carecer de rúbrica alguna que acredite fecha, lugar, personas que tomaron conocimiento del mismo, y no existir certeza que un documento privado, redactado por una parte, sin la aquiescencia de la otra, genera algún efecto probatorio. Finalmente, objeta por falta de autenticidad.

Arguye, que objeta el documento N° 3 por ser manifiestamente impertinente y falto de integridad, pues no se han acompañado a sus efectos ninguno de los documentos que en él se hacen mención: *“Manual de prevención de blanqueo de capitales, Manual de procedimiento LA FT VF, anexo 1 conocimiento de cliente, anexo 2 declaración de Pep y anexo 3 registro oficiales de cumplimiento”* (sic).

Séptimo: Que al folio 63 comparece el apoderado de la parte demandante evacuado el traslado de la incidencia y solicitando el total rechazo de la misma.

Señala, que la objeción debe ser rechazada, primeramente, porque no se funda en ninguna norma legal, y segundo, porque además, busca caprichosamente alegar la falsedad e integridad de un documento que está firmado por la demandada, en el cual también consta, de puño y letra, su nombre y cédula de identidad. Agrega, que el Reglamento Interno acompañado en autos, es el que estaba vigente al momento de la relación laboral con la demandante, y el comprobante al que alude el demandante, es se adjunta al Reglamento para efectos de ser acompañado en la Inspección del Trabajo, pero es el mismo que firmó la ex trabajadora.

Afirma, que tanto el Reglamento como el Comprobante gozan de veracidad e integridad.

Termina, arguyendo que el que se hayan subrayado ciertas normas del Código de Ética, en caso alguno tilda al documento como poco íntegro o falso, toda vez, que su parte subrayó de buena fe las normas del Código de Ética relacionadas y pertinentes con el caso de autos.



Octavo: Que conforme al mérito de autos, se tiene que los documentos objetados fueron acompañados por la parte demandante al folio 35, signados con los números 2, 3, 5 y 6 de dicha presentación, y consisten en los siguientes:

- 1) Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, suscrito por la demandada.
- 2) Comprobante de entrega de Manual de Prevención del blanqueo de Capitales, Manual de Procedimiento LA FT VF, Anexo 1 Conocimiento Clientes, Anexo 2 Declaración PEP y Anexo 3 Registro de Oficiales de Cumplimiento.
- 3) Código de ética, conflictos de intereses y estándares de conducta de la empresa Latam Factors.
- 4) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa Latam Factors S.A

Noveno: Que del estudio de los documentos impugnados, se tiene que conforme a su naturaleza, estos constituyen instrumentos privados que emanan de la misma parte que los presenta, salvo el Comprobante de entrega que se señala fue suscrito por la propia incidentista, y respecto de los cuales, el legislador ha previsto como causales de objeción *la falsedad y la falta de integridad*.

Pues bien, versando los fundamentos en que se sustenta la objeción alegada por la demandante en cuestiones diversas a las que se refieren las causales por las que se debe objetar este tipo de documentos, sino más bien al valor probatorio de los mismos para acreditar los hechos controvertidos, facultad privativa del tribunal, es que la impugnación de documentos deducida por la demandada será rechazada, sin perjuicio del valor probatorio que se les asigne, en definitiva.

A mayor abundamiento, observados los documentos impugnados, se tiene que éstos son íntegros, toda vez, que no se advierte que le falte alguna de sus partes, así como tampoco consta antecedente alguno que permita establecer la falsedad alegada en la incidencia.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa.



Décimo: Que a lo principal del folio 15, comparece la parte demandada oponiendo excepción de falta de legitimidad activa, y solicitando que se excluya a FONDO DE INVERSION PRIVADO FACTORIN UNO como parte demandante en autos, con costas.

Señala, que reconoce como parte a la empresa LATAM FACTOR S.A., no así a la empresa FONDO DE INVERSION PRIVADO FACTORING UNO, toda vez, que nunca existió una relación contractual con esta última.

Explica, que la empresa a la que prestó servicios como trabajadora es a LATAM FACTOR S.A, hasta su desvinculación por el art. 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, y no así por alguna causal de incumplimiento contractual imputable a su persona, motivo por el que es imposible que haya afectado con algún hecho a la empresa FONDO DE INVERSION PRIVADO FACTORIN UNO.

Esgrime, que tanto por lo anterior, como *“por falta de causa”* (sic), entiende que esta última empresa debe ser sancionada con su segregación como demandante de autos. Agrega, que si se llegase a aceptar la comparecencia de este demandante, se estaría generando la posibilidad que todas las empresas de factoring que evidencien un atisbo de supuesta competencia desleal demanden a los ejecutivos que osen enviar una carta de presentación de los servicios de una empresa catalogada con el mismo giro, lo que a todas luces se evidencia irrisorio.

Undécimo: Que al folio 18 comparece la parte demandante evacuando el traslado de la excepción y solicitando su total rechazo, con costas.

Señala, que la excepción carece de todo fundamento ya que es una cuestión de fondo que deberá ser probada y acreditada en la instancia procesal pertinente, y no como excepción dilatoria.

Duodécimo: Que, para una acertada resolución de la excepción dilatoria en estudio, es menester distinguir previamente tres instituciones jurídicas atingentes. La acción, la legitimación procesal o en causa, y la legitimación activa.

La acción propiamente tal, es un derecho subjetivo autónomo dirigido a obtener una determinada resolución jurisdiccional, favorable a la petición de la



persona que la ejerce (Excma. Corte Suprema, Primera Sala, 18 de junio de 2012, [Rol 1064-2012](#)).

A su vez, la legitimación procesal, legitimación en causa o *legitimatio ad causam*, es la demostración de la existencia de la calidad invocada en el juicio. Será activa cuando se refiere al actor y pasiva cuando lo es al demandado. En otras palabras, la legitimación para ser sujeto activo o pasivo de un proceso proviene de la correspondencia del actor y del demandado con la acción que se ejerce y resulta ser uno de los puntales del litigio, pues, precisamente, enfocando el pleito desde el interés jurídico cuya protección habrá de esgrimir el demandante, vinculado a quien podrá comportarse como su legítimo contradictor, atendido el interés que tiene comprometido en el derecho impetrado y, por ende en la secuela del proceso, es que los sentenciadores llegarán a definir la controversia. Esto, dado que la legitimación de la calidad de obrar en el pleito no es un requisito para el que el litigante materialice el ejercicio de la acción, sino para que la sentencia que en definitiva se pronuncie lo tenga por ganancioso o perdedoso del derecho que se encaminaba mediante dicho arbitrio. De este modo, si los antecedentes demuestran la falta o insuficiencia de la legitimación activa o pasiva, el juzgador rechazará la demanda, no porque ésta haya sido mal deducida, sino porque la acción no corresponde al actor o contra el demandado (Ibídem).

Asimismo, se ha resuelto que la legitimación procesal es un presupuesto de fondo y de eficacia jurídica de la acción, básico y esencial para acceder a la tutela judicial, y en palabras del profesor Cristian Maturana Miquel, *“la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso”* (Excma. Corte Suprema, Primera Sala, 22 de octubre de 2013, [Rol 13553-2013](#)).

Por su parte, la legitimación activa se refiere al actor titular del derecho que pretende, la que requiere para el éxito de su demanda: 1) que el derecho ampare la pretensión esgrimida por el actor; 2) la identidad de la persona del actor con la persona que ostenta la titularidad de esa pretensión; y 3) el interés de conseguir la declaración impetrada. En este sentido, la atribución subjetiva de los derechos y obligaciones deducidos en juicio es una cuestión de fondo que afecta el



ejercicio de la acción y que, por lo tanto, debe ser objeto de análisis al momento de pronunciarse la decisión. Constituye entonces deber del tribunal determinar si concurre o no la legitimación para impetrar la acción civil o pretensión ejercida en la demanda, cuestión que es un presupuesto procesal de fondo destinado a obtener una sentencia favorable (Corte Suprema, Primera Sala, 31 de agosto de 2014, [Rol 3712-2015](#) y 21 de septiembre de 2016, [Rol 5334-2016](#)).

Décimo tercero: Que habiéndose deducido en autos acción de cesación de actos de competencia desleal, esto es, incoada por el demandante la acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica, hipótesis prevista en la letra a) del art. 5º de la Ley 20.169, y fundada la excepción de falta de legitimación activa en estudio, en que la demandada no habría sido trabajadora de la empresa FONDO DE INVERSION PRIVADO FACTORIN UNO, y ergo, no existiría entre ambos vínculo contractual alguno; cuestión que ataca directamente uno de los presupuestos de la acción de autos, la cual necesariamente debe ser objeto de análisis al momento de pronunciarse la decisión respecto del fondo, es que se emitirá pronunciamiento de la excepción en estudio, precisamente en dicha oportunidad, conjuntamente con la acción deducida, al revisarse el fondo.

En cuanto al fondo.

Décimo cuarto: Que los actores deducen acción de cesación de actos de competencia desleal, en contra de doña **Tania Belén Vergara Díaz**, y solicitan que se ordene la cesación de los actos de competencia desleal en contra de su parte, y la publicación de la sentencia definitiva en el Diario Oficial o en un diario de libre circulación nacional, a costa de la demandada; se condene a la demandada a indemnizar todos los perjuicios ocasionados, por la suma de \$20.000.000.-; y se curse la multa establecida en el art. 10 de la Ley N° 20.169, esto es, el máximo permitido y que corresponde a 1.000 UTM a beneficio fiscal; con costas. Todo, por las fundamentaciones de hecho y de derecho descritos en lo expositivo de esta sentencia.

Décimo quinto: Que al folio 15 rola minuta escrita por medio de la cual la demandada evacuó el trámite de contestación, y que se encuentra reproducida en la parte expositiva de esta sentencia. .



Décimo sexto: Que en cuanto al derecho aplicable en la resolución de autos, cabe consignar que conforme a la regla general del art. 3º de la Ley 20.169, *“es un acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”*.

A su vez, el art. 5º de la Ley 20.169, prescribe que *“Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, conjunta o separadamente, las siguientes acciones:*

a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica.

b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste.

c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo.

d) Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.”

Asimismo, el art. 6º de la Ley 20.169, señala que *“Cualquiera que resulte directa y personalmente amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal podrá ejercer las acciones señaladas en las letras a) a d) del artículo anterior.*

Con todo, no habrá lugar a indemnización de perjuicios de acuerdo con esta ley si el demandado ya hubiese sido condenado a reparar el mismo daño de conformidad con otro ordenamiento legal.

Las asociaciones gremiales que tengan por función efectiva la defensa de los intereses de agentes del mercado podrán interponer, en interés de sus miembros lesionados por un acto de competencia desleal, las acciones contempladas en las letras a) a c) del artículo anterior.”



Finalmente, el art. 10^o de la Ley 20.169, establece que *“Si la sentencia firme establece que han existido uno o más actos de competencia desleal, el tribunal que la dictó deberá remitir todos los antecedentes del juicio al Fiscal Nacional Económico, quien tendrá la facultad de requerir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, atendidas la gravedad de la infracción o la extensión del perjuicio provocado, la aplicación de la multa correspondiente de conformidad con esta ley.*

El Fiscal Nacional Económico podrá interponer la acción ante el Tribunal de la Libre Competencia dentro de los dos años siguientes a la recepción de los antecedentes.

La multa a que se refiere el inciso primero de este artículo fluctuará entre 2 y 1.000 unidades tributarias mensuales, y se aplicará a beneficio fiscal. Para la determinación del monto de la multa, se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente del infractor.”

Décimo séptimo: Que según ha estudiado la doctrina, la Ley N° 20.169 tiene por objeto fundamental precisar el concepto de competencia desleal, para así facilitar la interposición de acciones que busquen hacer efectiva la responsabilidad por ella. De este modo, no constituye un cambio sino más bien una profundización de la legislación aplicable en la materia, sobre la base del diagnóstico de que la evolución de la actividad económica requiere dar mayor protección a los competidores.

Asimismo, se ha señalado, que en cuanto a la definición de competencia desleal, convendría haber establecido un principio pro beneficio del consumidor, en caso que exista duda de si se trata de una conducta desleal o si el daño es de relevancia jurídica, de manera de evitar que esta ley sea utilizada para inhibir prácticas de competencia legítimas pero que afectan directamente la supervivencia de un competidor.

Con todo, se ha estudiado que las acciones contenidas en la Ley 20.169, pueden ser interpuestas por cualquiera que resulte directa y personalmente



amenazado o perjudicado en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal.

En esta materia, destaca el art. 6º de la Ley en comento, norma que faculta a las asociaciones gremiales para interponer las acciones referidas, cuando *“tengan por función efectiva la defensa de los intereses de agentes del mercado, en interés de sus miembros.”* (González Iturria, Marco Antonio., *“Ley N° 20.169, que regula la Competencia Desleal. Aspectos Generales”*, En: Competencia Desleal, Análisis crítico y elementos para la aplicación de la Ley N° 20.169, de 2007, Cuadernos de Extensión Jurídica 14, Universidad de Los Andes, año 2007, pp. 25-29).

Décimo octavo: De otro lado, se ha sintetizado que la Ley establece una definición general de competencia desleal, a saber, actos contrarios a la buena fe o a las buenas costumbres que persigan por medios ilegítimos desviar clientela de un agente del mercado.

Además, enumera varias figuras típicas de conductas desleales. Así, castiga actos de confusión (aprovecharse de la reputación ajena imitando productos de un competidor); actos de engaño (inducir a error sobre las características de un producto); actos de denigración (denostar injustamente a un competidor); publicidad comparativa engañosa (comparar productos con referentes que no sean veraces ni demostrables); inducción al incumplimiento de contratos (provocar el rompimiento de contratos de un competidor); y abuso de acciones judiciales (utilización manifiestamente excesiva de vías judiciales para entorpecer la actividad de un competidor).

Décimo noveno: Para perseguir la sanción de estas conductas, la Ley utiliza la lógica de la responsabilidad civil. En efecto, la competencia desleal consiste en un acto ilícito perjudicial para un competidor: el perjuicio no es otra cosa que la disminución de la clientela. Por tanto, se trata de una conducta ilícita que sólo interesa, en principio, al competidor directamente perjudicado. Y en esto existe una diferencia radical con los actos contrarios a la libre competencia, donde no sólo hay intereses privados comprometidos, sino también el interés público de reprimir las situaciones de abuso de poder de mercado.



En materia de competencia desleal, los intereses privados se cautelan reparando el daño provocado al competidor: haciendo cesar el acto, declarando el carácter deshonesto de una conducta, remediando en naturaleza el mal causado e indemnizando los perjuicios.

En resumen, la ley regula las acciones de competencia desleal con la lógica de la responsabilidad civil, es decir, es el competidor perjudicado quien puede exigir ante el juez civil la cesación o remoción de los efectos del acto y la indemnización de los daños sufridos. Se estima que la competencia desleal es un ilícito civil, un acto de un agente que causa daño a otro. El daño es bastante particular: se trata de la disminución del número de clientes.

Vigésimo: Como ya se esbozó, la competencia desleal presenta una diferencia radical con la libre competencia. En los atentados contra la libre competencia el bien jurídico envuelto va más allá de la tutela de intereses privados. La protección de mercados abiertos, la neutralización de abusos de poder de mercado y la proscripción de acuerdos tendientes a consagrarlos importan un interés público en que los mercados sean competitivos para que los contratos puedan estar amparados por una presunción de justicia. Lo anterior afecta no sólo a ese competidor, sino también al resto de los agentes del mercado y, en general, a los consumidores que sufrirán las consecuencias de esos actos. Por esto, se justifica que los atentados contra la libre competencia den lugar a multas y otras sanciones cuasipenales. Del mismo modo, en atención a la especialidad de materia se justifica también la creación de una jurisdicción especial, encargada de aplicar, con las garantías procesales del derecho sancionador, tales sanciones (el TDLC).

En cambio, los efectos de los atentados contra la competencia leal se traducen directamente en una pérdida de clientela para el competidor afectado, perjuicio que debe ser reparado por los instrumentos que proporciona la responsabilidad civil.

En efecto, en nuestra legislación la lealtad o decencia en el comercio es protegida por la legislación civil mediante los mecanismos propios del derecho privado, como la responsabilidad civil o las acciones contractuales. Sólo en ciertas hipótesis tipificadas por la legislación, las actividades ilícitas en el comercio pueden dar lugar a una sanción penal cuando atentan contra intereses



considerados superiores por el ordenamiento jurídico (como ocurre en las figuras de estafa o en la apropiación indebida). Fuera de estas hipótesis, la lealtad en el tráfico se protege por las mencionadas herramientas de derecho privado.

Vigésimo primero: La doctrina en estudio, distingue entre competencia ruda y la competencia deshonesto, refiriendo que el art. 3º de la Ley 20.169 define la competencia desleal sobre la base de estándares generales: “En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado” .

Nuestro sistema reconoce la competencia y, en definitiva, el éxito de un agente del mercado pasa muchas veces por ganar la clientela de otros. Naturalmente que esto causa un perjuicio a ese competidor, pero es un perjuicio emanado de un acto lícito: la competencia leal, aunque decidida. Un principio general de la actuación de los agentes del mercado es que deben estar dispuestos a tomar a su cargo los efectos que tengan en su cifra de negocios el que un competidor lo haga mejor.

Es por eso, que históricamente algunas conductas han sido toleradas en el mercado, como la publicidad comparativa, que puede comparar precios o calidades de los bienes, lo cual es tolerado y considerado sano como método de información a los consumidores. Lo que no puede suceder es que sea arbitraria, efectuada sobre bases no demostrables objetivamente.

Para definir el umbral de comportamiento lícito, una primera posición se inclina por seguir las reglas generales de la responsabilidad civil, y sostener que es desleal la conducta que escapa al comportamiento esperable al empresario diligente. Un empresario diligente compite duro, pero con honestidad. Es lo que ha seguido Francia, y Chile, pues ambos someten a la regla general de la responsabilidad aquiliana los actos de competencia desleal.

La experiencia comparada muestra que es ineludible recurrir a una regla general de esta naturaleza, ante la dificultad de definir ex ante todos los ilícitos. Pero es aconsejable que esta regla exija un comportamiento que se aparte ostensiblemente del estándar. Por eso la norma alude a la buena fe y a las



buenas costumbres. Para destacar que sólo una actuación particularmente reprochable en la materia puede ser objeto de sanción.

A su vez, la noción de buenas costumbres como límite a la actuación de las personas ha tendido a centrarse en el control de las malas prácticas comerciales. Parece conveniente apelar a esta noción de buenas costumbres, utilizada en el derecho comparado para reprimir situaciones de abusos cometidas por los actores del mercado. En todo caso, también es aconsejable evitar conceptos morales generales de difícil concreción jurídica, como la noción de “honestidad”, o que tienen una connotación más bien corporativista (como las “prácticas” de los comerciantes), que no necesariamente incluyen un estándar de buena conducta comercial.

Asimismo, son convenientes las orientaciones que contiene ese artículo dirigidas a los jueces, en el sentido de que la competencia desleal no puede ser un instrumento que entorpezca la competencia fuerte, pero legítima. Por esto, parece adecuado efectuar una referencia al propósito del acto de competencia desleal objeto de represión, esto es, desviar ilícitamente la clientela de terceros. Aunque la mención de la vulneración de las buenas costumbres envuelve una referencia a la ilicitud, es conveniente reiterar esta idea para excluir la hipótesis de que la ley contra la competencia desleal pueda ser usada para fines contrarios a la competencia lícita.

Se trata de un acto deliberado, conducente a desviar clientela y, por esto, revestido del carácter de mala fe o dolo. Como es sabido, el dolo o culpa intencional exige la prueba de la intención del agente y, por eso, se aprecia en concreto y produce una serie de consecuencias particulares: no puede quedar cubierto por cláusulas de exención de responsabilidad (art. 1465); no constituye un riesgo asegurable; provoca la extensión de los perjuicios reparables (art. 1558), entre otros.

Vigésimo segundo: Finalmente, la Ley contiene una enumeración no taxativa de conductas tipificadas como ilícitos de competencia desleal, cuyo tipo tienen por fin dar pautas a los jueces acerca del tipo de conducta que se sanciona. En todas estas hipótesis la ley presume que el comportamiento se aparta del estándar deseable del empresario diligente. Así, dichos actos pueden resumirse



en actos de confusión (art. 4º letra a); actos de engaño (art. 4º letra b); actos de denigración (art. 4º letras c y d); actos de publicidad comparativa (art. 4º letra e); actos de inducción al incumplimiento de contratos (art. 4º letra f); y actos de abuso de acciones judiciales (art. 4º letra g) (Tapia Rodríguez, Mauricio., “*Responsabilidad Civil por actos de Competencia Desleal en Derecho Chileno*”, En: Competencia Desleal, Análisis crítico y elementos para la aplicación de la Ley N° 20.169, de 2007, Cuadernos de Extensión Jurídica 14, Universidad de Los Andes, año 2007, pp. 85-93)

Vigésimo tercero: Que la doctrina antes descrita, ha sido ratificada por jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, quien pronunciándose sobre recurso de casación en el fondo deducido en causa sobre un caso similar al de los presentes autos, razonó lo siguiente:

“Quinto: Que, por otra parte, tampoco es posible configurar las vulneraciones a los artículos 3 y 4 de la Ley N° 20.169, en particular, del primero, puesto que el segundo se propone como un contraste interpretativo que no se desarrolló en la sentencia dictada por los tribunales del fondo.

En efecto, si bien consagra una norma genérica que, sin ser abstracta, tampoco es taxativa, permite sancionar cualquier conducta que cumpla con sus requisitos, que son, la existencia de una conducta; que sea contraria a la buena fe o buenas costumbres; en la que el agente haya empleado medios ilegítimos; y, con el fin de desviar clientela de un agente del mercado, provocando daño.

Como se advierte, no todo desvío de clientela puede ser sancionado por el compendio legal en análisis, tipificando alguna de las conductas a las que la ley le atribuye dicha calidad, para lo cual es menester acreditar la intención de captar clientes utilizando medios ilegítimos, que se identifican, específicamente, con acciones que contrarían la buena fe y las buenas costumbres.

En la especie, las acciones que fueron acreditadas no pueden tildarse como contrarias a dichos conceptos, si no se probó el modo como se pretendía captar al único cliente que, según se imputó, sería objeto de desviación ilícita.



requiriéndose, como necesidad para configurar la conducta que se reprocha, la utilización de medios ilegítimos, que, a la postre, no fueron probados, lo que implica desestimar la concurrencia de una conducta sancionable por el cuerpo legislativo en referencia” (Excma. Corte Suprema, Sentencia de fecha 12/05/2020, dictada en autos ROL 16226-2019).

Vigésimo cuarto: Que atento al derecho, doctrina y jurisprudencia descrita, a la acción deducida al folio 1, y en mérito de la etapa de discusión de autos, **se tiene** que el objeto de la *litis* se centra en determinar si la demandada, doña Tania Belén Vergara Díaz, en calidad de trabajadora de la empresa TANNER y sirviéndose de la base de clientes propiedad de LATAM FACTORS S.A, contactó clientes de esta última para desviarlos a la empresa donde presta sus servicios. Asimismo, y en la afirmativa de lo anterior, es objeto del juicio establecer si la conducta de la demandada constituye un acto de competencia desleal, y en su caso, determinar si dicha actuación provocó los daños y perjuicios demandados.

Vigésimo quinto: Que conforme a la regla del onus probandi contenida en el inciso 1º artículo 1.698 del Código Civil, *“incumbe probar las obligaciones o su extinción a quién alega aquellas o ésta”*, lo que se traduce en la carga procesal del actor de acreditar la existencia del acto de competencia desleal imputado a la demandada, y en su caso, si éste produjo los daños y perjuicios que se demandan, así como la naturaleza y monto de los mismos. A su vez, corresponde a la demandada desvirtuar los hechos aducidos por la demandante.

Vigésimo sexto: Que para acreditar su aserto, la actora rindió la prueba instrumental acompañada al folio 35, consistente en:

- 1) Contrato de Trabajo de fecha 21/08/2017.
- 2) Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, firmado por la demandada.
- 3) Comprobante de entrega de Manual de Prevención del blanqueo de Capitales, Manual de Procedimiento LA FT VF, Anexo 1 Conocimiento Clientes, Anexo 2 Declaración PEP y Anexo 3 Registro de Oficiales de Cumplimiento.
- 4) Finiquito de contrato de trabajo.



5) Código de Ética, conflictos de intereses y estándares de conducta de la empresa Latam Factors.

6) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa Latam Factors S.A

Asimismo, las demandantes ofrecieron la prueba documental del folio 37, consistente en Correo electrónico de fecha 22/08/2018.

Vigésimo séptimo: Que la demandada rindió la siguiente prueba instrumental:

Al folio 46

1) Terminación de contrato de trabajo y finiquito, de fecha 31/05/2018, documento que pone fin a la relación laboral entre Tania Belén Vergara Díaz y la empresa LATAM FACTOR S.A. firmada ante Notario Público Myriam Amigo Arancibia.

2) Copia de *“Pantallazo de búsqueda Google de la empresa Makina Automóviles”* (sic).

3) *“Copia de pagina web makina-autos.cl”* (sic), página principal o home de sitio web de la empresa señalada.

4) Correo electrónico de remitido por Tania Vergara Díaz a la empresa Makina Spa.

Al folio 40

5) Declaración Jurada de don Cristian Jesús Basoalto Rebolledo, firmada ante Notario Público de fecha 22/11/2019.

6) Certificado emitido por Tanner con fecha 22/11/2019, suscrito don Ricardo Elías Cerda Silva, Agente de sucursal plaza Egaña de Tanner Servicios Financieros.

Vigésimo octavo: Que de la etapa de discusión y especialmente de las declaraciones de la parte demandada efectuadas en su escrito de contestación del folio 15, la cuales conforme al art. 1712 del Código Civil, constituyen una



confesión judicial espontánea, **se tiene** por acreditado que doña **Tania Belén Vergara Díaz** fue trabajadora de **LATAM FACTORS** desde el 21/08/2017 hasta el día 31/05/2018, en calidad de asistente comercial.

Ratifica lo anterior, el Contrato de Trabajo de fecha 21/08/2017 y Finiquito de contrato de trabajo acompañados por las actoras al folio 35, y el documento denominado Terminación de contrato de trabajo y finiquito de fecha 31/05/2018, ambos instrumentos privados suscritos ante Notario Público, por doña **Tania Belén Vergara Díaz** como trabajadora y la empresa **LATAM FACTOR S.A.** como empleador. Con todo, del análisis conforme a las reglas de la prueba legal o tasada de los documentos antes referidos, los cuales en su conjunto constituyen antecedes graves precisos y concordantes que sirven de base para una presunción judicial conforme al art. 1713 del Código Civil, **se colige** que conforme a las cláusula 2ª numeral 3) y cláusula 3ª del contrato de trabajo, la demanda se obligó con **LATAM FACTOR S.A.** a *“guardar la más absoluta reserva respecto de todas las operaciones comerciales, técnicas, procedimientos y prácticas de labores cargo función”* (sic); y a *“ejecutar cualquier clase de negociaciones similares conexas parecidas o equivalentes que digan relación directa o indirecta con el giro del empleador (...)”* (sic).

De otro lado, en virtud igualmente de la confesión judicial espontánea de la demandada consignada en su escrito de contestación del folio 15, y solo para los efectos de la acción deducida en autos, toda vez, que la empresa Tanner no ha sido válidamente emplazada, **se tiene** que doña **Tania Belén Vergara Díaz** es actualmente trabajadora de la dicha entidad.

Vigésimo noveno: Que en este estado de cosas, no habiéndose logrado acreditar que exista alguna vinculación entre los hechos descritos, la demandada y la actora **Fondo de Inversión Privado Factoring Uno**, y ergo, que ésta última resulte directa y personalmente amenazada o perjudicada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal, en consecuencia la referida la demandante no ha logrado acreditar su *legitimatio ad causam*, concepto previamente explicitado en el basamento décimo segundo de esta sentencia, razón por la cual la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada, será totalmente acogida como se señalará en lo parte resolutive.



Trigésimo: Que sin perjuicio de lo hasta este punto concluido, la actora ofreció el documento denominado correo electrónico de fecha 22/08/2018 acompañado por las demandantes al folio 37, conforme al cual don Juan Andrés Ulloa (andresullova@gmail.com), habría informado a la demandante, por intermedio de Alexis Renault (a.renault@latamfactors.cl), que ha sido contactado por Tannen Servicios Financieros “*cuya ejecutiva es ex integrante*” (sic) de la demandante, con ofertas en tazas y comisiones en servicios de factoring.

Con todo, del análisis conforme a las reglas de la prueba legal o tasada del documento referido, se tiene que este constituye un instrumento privado emanado de un tercero, que por sí solo no genera convicción respecto del hecho dañosos imputado a la demandada, esto es, haberse servido de la lista de clientes de la demandante para ofrecer los servicios de actual empleadora. Finalmente, el documento no es concordante ni preciso respecto de otros antecedentes aportados a autos, de modo que tampoco reviste las cualidades legales para servir de base de una presunción judicial al tenor del **art. 1712 del Código Civil**.

Trigésimo primero: Que asimismo, la actora ofreció el documento denominado declaración jurada fecha 22/11/2019 suscrita por el representante legal de la empresa Cristian Jesús Basoalto Rebolledo y acompañada por la demandada al folio 40, en la cual el compareciente manifestó que “*su empresa*” (sic), la cual no singulariza, opera de forma frecuente con Tanner Servicios Financieros S.A demandada de autos, operando como su ejecutiva la demandada, doña Tania Vergara Díaz. Añadió, que “*su empresa*” (sic) operaba anteriormente con la demandante, Latam Factors S.A., pero dadas las circunstancias y los cambios de condiciones de ésta para poder factorizar sus cheques, no pudo seguir con ellos, toda vez, que no aceptaba los cheques de sus clientes, quienes eran personas naturales con un solo giro, y solo aceptaban cheques de empresas. Es por los motivos expuestos, que buscó nuevas alternativas, encontrando mediante un aviso en “*la página LinkedIn*” (sic), a la empresa Tanner Servicios Financieros S.A. y a su ejecutiva doña Tania Vergara Díaz, quienes le ofrecieron condiciones muy distintas a Latam, y no presentando inconvenientes para recibir sus operaciones.

Pues bien, del análisis conforme a las reglas de la prueba legal o tasada del antedicho documento, se tiene que éste constituye un instrumento privado emanado de tercero ajeno al juicio quien no compareció personalmente a estrados



reconociendo ni ratificando su contenido, motivo por el cual carece de todo valor probatorio, máxime si tampoco es concordante con otros antecedentes, y ergo, no sirve de base para una presunción judicial conforme al **art. 1712 del Código Civil**.

Que a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo anterior, en el evento de valorar el documento anteriormente referido, cabe consignar que del tenor de la declaración en él contenida, se puede desprender que no fue la acción o intervención de la demanda la que llevó al declarante a buscar nuevas alternativas de empresa de factoring, sino la variación, por parte de la demandante, de las condiciones de factorización de los cheques de personas naturales.

Trigésimo segundo: Que para resolver, es preciso determinar si hubo clientes contactados por la demandada en calidad de trabajadora de Tanner, luego con el fin de desviar la clientela de su ex empleador, si dicho cliente se encuentran en la lista de clientes propiedad de **LATAM FACTOR S.A.**, y por último, si la demandada se sirvió de dicha lista para poder contactarlos.

En efecto, del análisis conforme a las reglas de la prueba legal o tasada de la prueba documental rendida por la parte demandante a los folios 35 y 36, consistentes en Comprobante de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad; Comprobante de entrega de Manual de Prevención del blanqueo de Capitales, Manual de Procedimiento LA FT VF, Anexo 1 Conocimiento Clientes, Anexo 2 Declaración PEP y Anexo 3 Registro de Oficiales de Cumplimiento; Código de Ética, conflictos de intereses y estándares de conducta; Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad; y Correo electrónico de fecha 22/08/2018; **se colige** que **LATAM FACTOR S.A.** es propietario de una lista de clientes. Sin embargo, de la prueba rendida en autos, no es posible determinar el contenido de dicho listado, ni menos, si las empresas contactadas por la demandada en calidad de trabajadora de Tanner estaban comprendidas en aquel, conforme a las características descritas en el libelo de demanda, toda vez, que aun cuando conforme al correo electrónico del folio 37 antes referido, el remitente se identifique como cliente de **LATAM FACTOR S.A.**, lo cierto, es que no se detalla el tipo de cliente de que se trata y si éste particularmente se encuentra en el listado de marras.



Con todo, y en la hipótesis que la empresa contactada si se hubiese encontrado en el listado, los demandantes tampoco acreditaron que la demandada se haya valido de las mismas para contactarla y ofrecerle los servicios de Tanner.

En este estado de cosas, y no habiéndose logrado acreditar el supuesto de hecho de la acción deducida en autos, esto es, que los clientes contactados por la demandada en calidad de trabajadora de Tanner, primero, se encuentran en la lista de clientes propiedad de **LATAM FACTOR S.A.**, y que para ello se haya servido de dicho listado; es que la demanda de autos deberá ser totalmente rechazada, toda vez, que no se ha logrado acreditar que la demanda haya incurrido en algún a del las conductas prevista por el legislador como acto d competencia desleal.

Trigésimo tercero: Que la demás prueba rendida, valorada y singularizada, en nada altera lo anteriormente concluido, motivo por el que se omite su análisis particular. Del mismo modo y idénticas razones, se omitirá pronunciamiento respecto de otras alegaciones y peticiones efectuadas por las partes.

Trigésimo cuarto: Que por haber tenido motivos plausibles para litigar, y en virtud del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no se condenará a la parte demandada.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1.698, 1.712 y 1.713 del Código Civil, 144, 160, 170, 342, 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, y Ley Nro. 20.169 sobre Competencia Desleal, **SE DECLARA:**

- I. Que **SE RECHAZAN** las objeciones de documentos deducidas a los folios 51 y 55.
- II. Que **SE ACOGE** la excepción de falta de legitimación activa opuesta al folio 15 en contra de **Fondo de Inversión Privado Factoring Uno**.
- III. Que **SE RECHAZA** la demanda sobre acción de cesación de actos de competencia desleal en virtud de la Ley 20.169; deducida en contra de doña **Tania Belén Vergara Díaz**.
- IV. Que no se condena en costas a la parte demandada.



NOTIFÍQUESE-REGÍSTRESE-ARCHÍVESE, EN SU OPORTUNIDAD.

/jsp.

Dictada por doña Claudia Marín Campusano, Juez Titular.

Autoriza doña Edith Alvarez Caroca, Secretaria subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **San Miguel, nueve de Febrero de dos mil veintiuno**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>